



Informe sobre la situación económico-financiera y la ejecución funcional del gasto de la Administración autonómica

- **El gasto ejecutado ascendió a 10.668 millones de euros en 2018, un 4% más que en 2015. La autonomía presupuestaria mejora en el periodo, ya que las transferencias corrientes recibidas y los ingresos tributarios aumentan, mientras disminuye la necesidad de recurrir a la emisión de pasivos financieros**
- ***Sanidad y Educación*, con 3.714 y 2.123 millones de euros, respectivamente, suponen el 55% del gasto total en 2018, habiéndose incrementado un 3% y un 5% con respecto a 2015**
- **El mayor aumento de gasto, tanto absoluto como relativo, corresponde a amortización e intereses de la *Deuda pública*, que crece un 33% hasta los 1.326 millones, un 12% del total**
- **El área *Protección y promoción social* crece un 11% hasta llegar a los 1.160 millones. En sentido contrario, el gasto en *Sectores económicos* baja en 233 millones, el mayor descenso de todas las áreas presupuestarias con un 10%**

El Consejo de Cuentas ha entregado hoy en las Cortes de Castilla y León el “Informe acerca de la situación y actividad económico-financiera, así como de la ejecución funcional del gasto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ejercicio 2018, relativo a las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública”, aprobado en su última sesión plenaria.

El objetivo general de esta auditoría operativa -correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2020- es realizar un análisis sobre determinados aspectos de la situación y actividad económico-financiera, así como de la ejecución funcional del gasto de las entidades del sector público autonómico sujetas al régimen de contabilidad pública. La información utilizada es la contenida en la Cuenta General de la Comunidad rendida de los ejercicios 2015 a 2018.

Magnitudes e indicadores presupuestarios. Los gastos presupuestarios ejecutados en 2018 ascienden a 10.668 millones de euros, un 4% más que en 2015. En concreto, durante el periodo analizado los gastos corrientes suben un 5%, hasta los 8.428 millones. La ejecución de operaciones de capital cae un 14%, situándose



en 937 millones. Por último, el gasto por operaciones financieras crece un 15%, ascendiendo a 1.303 millones, debido básicamente a la necesidad de amortizaciones. El grado de ejecución de la totalidad de gastos en 2018 se sitúa en el 94%, menor que en ejercicios anteriores.

La ejecución de ingresos en 2018 asciende a 10.925 millones de euros, un 2% más que la de 2015. Los ingresos corrientes crecen un 13% hasta alcanzar los 8.820 millones y, dentro de estos, el mayor incremento, un 25%, corresponde a transferencias corrientes. También aumentan los ingresos impositivos. Por el contrario, los ingresos por operaciones de capital disminuyen un 30%, ascendiendo a 337 millones. Por último, los ingresos por operaciones financieras disminuyen un 26%, situándose en 1.768 millones, principalmente por la bajada de ingresos por emisión de pasivos financieros. El grado de ejecución del total de ingresos se sitúa en el 100% en 2018, tres puntos más que en 2015.

La autonomía en el ámbito presupuestario se ha incrementado en el periodo, ya que las transferencias recibidas, las corrientes -no así las de capital- se han incrementado y los ingresos tributarios también, mientras que ha disminuido la necesidad de recurrir a la emisión de pasivos financieros.

Los gastos corrientes se sitúan en 2018 en el 79% de las obligaciones reconocidas, valor muy similar al de 2015. El peso de los gastos de personal presenta una tendencia estable por debajo del 50% de los gastos corrientes, mientras que el índice de gastos rígidos se reduce ligeramente al 51% en 2018, debido al descenso de los gastos financieros. Por otra parte, el esfuerzo inversor experimenta una tendencia decreciente, debido principalmente a una reducción significativa en transferencias de capital, no así de las inversiones reales.

El índice de la carga financiera global de la deuda (gastos financieros y amortizaciones en relación a ingresos corrientes) pasa de un 18% en 2015 a un 16% en 2018, lo que provoca un impacto menos negativo al final del periodo para atender el funcionamiento de los servicios.

El margen de funcionamiento (capacidad para generar recursos de las operaciones corrientes sin considerar las transferencias) experimenta una tendencia favorable y por primera vez alcanza valores positivos en 2018, con 23 millones de euros. Si en este margen se tiene en cuenta el impacto de las transferencias corrientes, el ahorro bruto (diferencia entre derechos y obligaciones de operaciones corrientes) muestra también tendencia favorable, al pasar su importe de -258 millones en 2015 a 392 millones en 2018. Si al ahorro bruto se deduce la amortización de la deuda, el ahorro neto obtenido resulta negativo por importe de -825 millones en 2018, un 39% menos que 2015. Así, el margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a inversiones.



Las necesidades de financiación (resultado presupuestario de las operaciones no financieras) ascienden en 2018 a 208 millones, si bien han disminuido significativamente un 76% con respecto a las existentes en 2015, año en que aquellas eran de 864 millones.

El resultado presupuestario (diferencia entre ingresos y gastos totales liquidados) presenta una tendencia descendente, ya que en 2015 su saldo fue positivo por importe de 409 millones, mientras que en 2018 el superávit era de 257 millones. Su evolución está condicionada al recurso al endeudamiento que permite atender las necesidades de financiación en cada ejercicio.

Balance de situación agregado. La evolución refleja una disminución significativa del patrimonio neto (diferencia entre activo y pasivo), cuyo importe desciende un 41% con respecto al 2015, situándose en los 1.720 millones en 2018.

En 2018 la diferencia entre el activo y el pasivo corriente presenta desequilibrio, con unas necesidades de financiación para atender sus obligaciones a corto plazo de 239 millones, superior a los 116 millones que se precisaban en 2015. Consecuencia de ello es una situación que genera tensiones de liquidez, con tendencia desfavorable.

Por otra parte los días que, en tiempo medio, se tarda en cobrar a los deudores y en pagar a los acreedores ordinarios se han reducido en este periodo, situándose en 2018 en los 52 y 59 días, respectivamente.

El indicador de endeudamiento general (deuda total en relación al activo total) experimenta una tendencia desfavorable, pasando del 83% en 2015 al 90% en 2018. Los indicadores de endeudamiento ponen de manifiesto que aumenta la dependencia de las entidades de crédito y/o de la emisión de deuda para obtener financiación. La deuda soportada por cada castellano y leonés se incrementa hasta los 6.343 euros por habitante en 2018, cuando en 2015 fue de 5.820 euros.

Cuenta del resultado económico-patrimonial agregada. Los resultados del ejercicio (ingresos y beneficios menos gastos y pérdidas) son estructuralmente negativos en el periodo analizado, con un desahorro que asciende a 105 millones en 2018. No obstante, la tendencia ha sido favorable, ya que se reduce un 87% con respecto a 2015, debido principalmente al incremento de los ingresos tributarios y de las transferencias y subvenciones corrientes recibidas.

Evolución de las áreas y políticas de gasto. De las seis áreas de gasto contempladas en la liquidación del presupuesto de la Comunidad, la de *Sanidad, educación y cultura*, con 5.927 millones de euros, supone el 56% del gasto total en 2018, habiéndose incrementado un 3% con respecto a 2015.



Por otra parte, el mayor aumento de gasto en el periodo fiscalizado, tanto en términos absolutos como relativos, corresponde a los 326 millones destinados a sufragar la amortización y los gastos financieros de la *Deuda pública*, que ha aumentado un 33% y alcanza los 1.326 millones de euros en 2018, un 12% del total. También crece, un 11%, el área de *Protección y promoción social*, hasta llegar a los 1.160 millones. Por el contrario el gasto en *Sectores económicos* baja en 233 millones, el mayor descenso de todas las áreas presupuestarias con un 10%, situándose en 2.023 millones en 2018. Los gastos menos significativos son los de *Servicios de carácter general* y los de *Justicia, defensa y seguridad* que representan el 2% y el 0,1%, respectivamente.

Si se analizan las políticas de gasto de las áreas anteriores, *Sanidad* con 3.714 millones, es la que mayor peso relativo supone, con un 35%. Ha experimentado una tendencia ascendente, incrementándose un 3%. A continuación le sigue, *Educación*, cuyo gasto asciende a 2.123 millones y supone un 20%, con un incremento del 5%, siendo la política que más aumenta en términos absolutos, 96 millones, al margen de la *Deuda pública*. Seguidamente se sitúa *Agricultura, ganadería y pesca*, con 1.313 millones, el 12% del total y un incremento del 7%. *Servicios sociales y promoción social*, con 723 millones en 2018 supone el 7%, incrementándose significativamente en 96 millones, un 15% con respecto a 2015. Todas estas políticas han destinado solamente entre un 1% y un 3% de sus recursos a inversiones.

La política que más ha aumentado en términos relativos con respecto a 2015 ha sido la de *Investigación, desarrollo e innovación*, con un incremento del 36% y de 39 millones de euros, para situarse en 2018 en un gasto de 146 millones.

El menor peso relativo en 2018 lo tienen las políticas de gasto de *Justicia; Seguridad ciudadana; Comercio y turismo; Alta dirección de la comunidad; Administración financiera y tributaria*; así como *Vivienda y urbanismo*.

Dentro de las políticas más relevantes, *Asistencia sanitaria*, gestionado por la Gerencia Regional de Salud, es el programa más importante con un peso relativo del 34% del gasto total y un importe de 3.599 millones. Incluye, entre otros, los subprogramas *Atención especializada* (2.283 millones) y *Atención primaria* (1.196 millones). Ambos subprogramas incrementan su ejecución en un 2% y un 5%, respectivamente.

Por el contrario, las políticas con un descenso del gasto más significativo son *Infraestructuras*, que disminuye 66 millones con respecto a 2015 y se sitúa en 343 millones en 2018 -afectando principalmente a los subprogramas *Carreteras y ferrocarriles* y *Promoción y ordenación del transporte-*, y especialmente *Industria y energía*, que disminuye en 312 millones, un 74%, situando su gasto de 2018 en 112 millones. Esta reducción afecta principalmente al programa *Desarrollo empresarial*.



También es significativo el descenso del gasto de 98 millones, que representa un 46% con respecto a 2015, en el programa *Mejoras estructuras agrarias y sistemas productivos*, cuya cuantía en 2018 asciende a 116 millones.

En 2018, los 4.428 euros de gasto público por habitante en la Comunidad se reparte principalmente entre las siguientes políticas de gasto: 1.542 euros se destinan a *Sanidad*, 881 euros a *Educación*, 550 euros a *Deuda pública*, 545 euros a *Agricultura, ganadería y pesca*, 300 euros a *Servicios sociales y promoción social* y 143 euros a *Infraestructuras*.

En relación con las modificaciones presupuestarias netas, cuya cuantía asciende a 265 millones en 2018, el mayor importe se produce en las políticas de *Sanidad* y *Educación* por valor de 182 millones y 70 millones, experimentando una tendencia descendente. Por el contrario en la política *Servicios sociales y promoción social*, donde se realizan modificaciones netas por importe de 27 millones, éstas aumentan progresivamente desde 2015.

El importe global de remanentes de crédito en 2018 asciende a 624 millones, un 11% inferior al existente en 2015. A nivel de políticas de gasto, *Fomento del empleo* con 95 millones de euros, *Agricultura, ganadería y pesca* con 77 millones e *Investigación, desarrollo e innovación* con 73 millones, son las que acumulan un mayor importe de créditos no gastados en 2018. Las políticas *Fomento del empleo*, *Investigación, desarrollo e innovación* y *Transferencias a las administraciones públicas* presentan grados de ejecución del 67% de su presupuesto definitivo. *Comercio y turismo* es la que refleja un grado de ejecución menor con un 64%.

De los 65 programas presupuestarios ejecutados por la Comunidad en 2018, hay 19 de ellos que lo hacen por debajo del 80%, algunos como el de *Planificación y producción energética* o *Comercio exterior* a niveles del 22%. Existen subprogramas de gasto que experimentan modificaciones netas positivas relevantes en 2018 pero que, sin embargo, han derivado en remanentes de crédito en su ejecución.

Las obligaciones pendientes de pago ascienden en 2018 a 379 millones, habiéndose incrementado un 33%. A nivel de políticas de gasto, *Educación* supone el 36% de la totalidad de las obligaciones pendientes por importe de 136 millones, seguido de *Sanidad* con 72 millones. Tanto unas como otras se incrementan considerablemente con respecto a 2015, un 124% y un 164% respectivamente.

El informe realiza 4 recomendaciones orientadas fundamentalmente a observar, vigilar y en su caso realizar actuaciones tendentes a corregir el comportamiento y evolución de determinadas magnitudes e indicadores. En todo caso, debe tenerse en cuenta que los efectos que pueda causar la pandemia generada por la Covid-19 no aparecen recogidos.